

Negociaciones con las FARC: se rompe la cadena de fracasos

Andrea Carolina Vargas Laverde*

Resumen

Con el surgimiento de los grupos guerrilleros y su permanencia en el tiempo como actor incidente en el conflicto armado interno, surge la necesidad de que el Estado le ponga fin a las actividades de los grupos insurgentes por medio de salidas negociadas. En ese sentido, la historia evidencia que desde 1981 se abre la puerta del diálogo con el propósito de acabar la confrontación armada.

Con el presidente de la época, el liberal Julio César Turbay Ayala, se iniciaron acercamientos con los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sin obtener un resultado favorable. Desde ese momento transcurrieron aproximadamente tres décadas, que dejaron un sinnúmero de experiencias de procesos fracasados, poniendo de presente la falta de confianza que surgía por el incumplimiento de alguna de las partes (Estado o FARC) con respecto a los presupuestos acordados, lo que conllevaba a la terminación fallida del proceso.

Hasta 2012, después de una década en la que no se produjeron acercamientos entre el Gobierno y las FARC, se inicia un nuevo proceso que tuvo como sede La Habana (Cuba), en donde líderes de cada una de las partes se sentaron por cuatro años para llegar a un consenso de seis puntos que pondría fin al conflicto armado interno entre estos dos actores. Sin embargo, como era de esperarse, la confianza en el proceso se vio debilitada, no porque alguna de las partes haya incumplido esta vez; sino porque el pueblo colombiano, apático al proceso, no le dio importancia y decidió no respaldarlo.

Palabras clave: conflicto armado, proceso de paz, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, negociaciones, movimientos sociales

* Estudiante de Derecho, Universidad Católica de Colombia.

En la historia de Colombia desde 1981 se ha intentado poner fin al conflicto armado e ideológico presentado entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por medio de una salida negociada. Sin embargo, siempre ha habido obstáculos que han hecho que los procesos liderados por el presidente de turno fracasen, a raíz de una desconfianza producto del incumplimiento de alguno de los actores.

En ese sentido, el devenir histórico evidencia que el presidente liberal Julio César Turbay Ayala (1978-1982) hace un primer acercamiento a las FARC, como movimiento revolucionario de carácter político-militar, nacido en 1964 en las montañas del sur del departamento del Tolima. Para ello, se creó una comisión liderada por el expresidente Carlos Lleras Restrepo, con el propósito de iniciar conversaciones para llegar así a un acuerdo. No obstante, esta iniciativa tuvo su final con el argumento de no tener los suficientes medios de comunicación con este grupo guerrillero (Pares, 2016)

El siguiente año, durante el mandato conservador del presidente Belisario Betancur (1982-1986), se propone un nuevo tratamiento al conflicto armado interno, consistente en una política que contenía: “Una amnistía amplia que se estableció mediante la aprobación de la Ley 35 del 18 de noviembre de 1982 por parte del Congreso Nacional; la promoción de la idea de la apertura democrática y las conversaciones con las organizaciones guerrilleras” (Sánchez, 2003).

Sumado a lo anterior, se reorganizó la Comisión de Paz creada y disuelta por el presidente Julio César Turbay, integrando a individuos de diferentes sectores sociales y políticos. Su principal objetivo fue crear un espacio que permitió discutir por primera vez de manera pluralista el futuro de Colombia desde la perspectiva de la paz.

En el marco de esta comisión, el 28 de mayo de 1984 se firma el primer acuerdo de cese al fuego con las FARC, conocido comúnmente como “El Pacto de la Uribe” en relación con el lugar donde se suscribió el acuerdo. El compromiso buscaba promover la modernización de las instituciones, fortalecer la democracia y establecer garantías para que

los integrantes de la guerrilla pudieran organizarse política, económica y socialmente (CNMH, 2016).

Betancur, al reconocer la oposición armada como un actor político, dio fundamento para que año y medio después de la firma del acuerdo se conformara la Unión Patriótica (UP), movimiento político en el que participaron integrantes de las FARC, miembros de partidos políticos, sindicalistas, entre otros individuos de la sociedad civil.

De acuerdo con cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, en 1986 la Unión Patriótica ubicó en cargos públicos 350 concejales, 23 diputados, nueve representantes a la cámara y seis senadores, como resultado de una exitosa y amplia gestión de alianzas políticas. En las elecciones para la presidencia, obtuvo más de 350.000 votos, hecho nunca antes visto en la historia de la izquierda colombiana.

Posterior a su participación electoral, se consolidó un plan de exterminio contra la militancia de los integrantes de la UP, sus familiares y simpatizantes. En esa persecución fueron asesinados:

Dos candidatos presidenciales, nueve congresistas, setenta concejales, decenas de diputados, alcaldes, dirigentes de juntas comunales, líderes sindicales, estudiantiles, del sector de la cultura y el magisterio; profesionales y centenares de militantes de base, sin que ninguna institución del Estado lo impidiera, ni actuara eficazmente para esclarecer los crímenes y sancionar a los responsables. (CCAJAR, 2006)

Así, la Comisión de Paz y la política propuesta por Belisario Betancur fueron decayendo por la falta de respaldo de los partidos, de la sociedad y del Gobierno mismo. El genocidio político, la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la retoma, a manos de las fuerzas militares, dio fin a años de conversaciones, treguas y acuerdos con los líderes guerrilleros, al hacerse evidente la falta de garantías para ejercer la oposición, junto con los ataques a la población civil y el surgimiento y accionar de los grupos paramilitares.

Con la expedición de la nueva Constitución y bajo el periodo presidencial de César Gaviria (1990-1994) se inicia un proceso de negociación con “La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar”, que estaba conformada por miembros de las FARC, del EPL y del ELN, teniendo como sede en un principio Caracas (Venezuela) y Tlaxcala en México.

Los diálogos comenzaron en junio de 1991. Allí se acordó una agenda que contenía diez puntos, mediante los cuales se llegó a acuerdos de mediación y verificación internacional, por medio de un acuerdo de veedurías regionales. Avanzaron en la exclusión del terrorismo y discutieron las modalidades posibles de cese al fuego.

Sin embargo, tras el secuestro y posterior asesinato del exministro Argelino Durán a manos de guerrilleros del EPL, se finalizaron los diálogos el 4 de mayo de 1992 cuando se hizo pública su muerte en cautiverio. Pese a lo anterior, el gobierno de Gaviria logró acuerdos de paz con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento Indígena Armado “Quintín Lame”, una fracción del ELN denominada Corriente de Renovación Socialista (CRS) y una columna del EPL llamada Garnica, mientras que por su lado las FARC continuaron su lucha armada (Colombia, 2013).

En 1998, con la llegada de Andrés Pastrana a la presidencia de la República (1998-2002), se reanudaron los diálogos con las FARC con el inicio de un nuevo proceso, esta vez denominado “Proceso de Paz del Caguán”, al centrarse en una zona de despeje comprendida por los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, con una dimensión de aproximadamente 42.000 kilómetros cuadrados.

En este proceso se definió una “agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia”, que incluyó temas como el empleo, los derechos humanos, la política agraria, los recursos naturales, el modelo de desarrollo económico y social, la reforma a la justicia y al Estado, las relaciones internacionales, entre otros (CNMH, 2016). No obstante, no fue fácil llegar a acuerdos ni avanzar en la agenda debido a las grandes diferencias de posiciones y a la dificultad para pasar del diálogo a la negociación.

Como lo mencionan Ramírez y Guedán (2005):

La desconfianza de las FARC tenía su lógica, después de los asesinatos de dirigentes y activistas de la Unión Patriótica (creada en 1994, dentro de los acuerdos de tregua con el Gobierno Betancur), un hecho que, como se ha dicho anteriormente, costó la vida de más de 3.500 de sus miembros. Es por esa desconfianza, que las pretensiones de la guerrilla en la mesa de negociación fueron un escudo impenetrable para los negociadores del Gobierno. (p. 58)

Sumado a lo anterior, las conversaciones se iniciaron en medio de una ola de violencia, dado que las FARC desplegaron una serie de acciones en contra de la población civil, “con un aumento de secuestros del 60 %, con el mismo número de homicidios y con un aumento de los negocios del narcotráfico” (Guedán y Ramírez, 2005, p. 62). Por otro lado, el Gobierno no encontró los mecanismos adecuados para poner fin al ciclo de violencia que sufría el país.

Desde esa perspectiva, el proceso sufrió una ruptura definitiva en 2002, ya que ambos actores no tenían ninguna intención de llegar a un acuerdo; pues como bien lo afirman Ramírez y Guedán (2005): “Ni las FARC habían decidido firmar un acuerdo de paz, creyendo que su oposición debía ser de por vida, ni el Estado estaba en condiciones de iniciar grandes reformas sociales, políticas y económicas en su estructura” (p. 63).

Con este hecho y disuelta la zona de distensión con el reingreso inmediato de fuerza pública en los 42.000 kilómetros cuadrados al sur del país, se desvanece la ilusión de alcanzar la paz en una mesa de negociaciones y aumenta el anhelo de ganar la guerra con acciones militares.

Después, tras una década, Juan Manuel Santos, como presidente electo, anuncia un nuevo inicio de diálogos con las FARC, constituyéndose posteriormente una mesa de negociaciones en la ciudad de La Habana. Esta mesa estaría conformada por delegados del Gobierno y de las FARC, con el propósito de dar fin a medio siglo de violencia e iniciar un proceso de reconstrucción nacional.

Esta mesa tuvo una duración de cuatro años, que permitió acordar seis puntos concernientes a una reforma rural integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; víctimas, e implementación, verificación y refrendación. Estos seis puntos fueron firmados primeramente el 26 de septiembre de 2016, en un acto público en la ciudad de Cartagena, donde Rodrigo Londoño más conocido por el sobrenombre de *Timochenko*, pidió perdón a todas las víctimas del conflicto armado y el presidente Santos reafirmó su posición de terminar su Gobierno dejándole a Colombia un proceso de paz culminado con las FARC.

En el punto de implementación, el presidente Santos con el fin de integrar al pueblo colombiano en los acuerdos, indicó que iba a existir un mecanismo por medio del cual se buscaría refrendar los seis puntos acordados en La Habana; este mecanismo de participación ciudadana fue el plebiscito, en el que por medio de una pregunta las y los colombianos decidirían si avalaban el contenido final del acuerdo.

La fecha escogida para emplear este mecanismo de participación ciudadana fue el 2 de octubre de 2016, que tenía como finalidad romper una serie de fracasos históricos, debido al incumplimiento del Gobierno o de las FARC, y dar por terminado así el conflicto armado que había iniciado en los años sesenta. Sin embargo, y de forma paradójica, una vez conocidos los resultados del plebiscito, la desconfianza inherente a estos procesos de negociación se hizo evidente en el pueblo colombiano, esta vez no por el hecho de que ganara el NO en esta contienda electoral, sino por la apatía y desinterés que se evidenció en toda la fase de promulgación del acuerdo, que se tradujo en un abstencionismo muy alto.

En este escenario, en el que una vez logrado un acuerdo con las FARC y vencida la cadena de fracasos que antecedían el proceso, se antepone un negativo respaldo por una gran mayoría de los colombianos. Es por ello que se hace indispensable señalar lo mencionado por Ferrajoli (2015):

La paz, como lo dispone el artículo 22 de la Constitución de Colombia, es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento; es, por ende, un derecho de la persona y a la vez un correspondiente deber de la esfera pública cuyo cumplimiento es cometido primario del Estado. Consistiendo en un derecho fundamental, el derecho a la paz, entonces, al igual que todos los derechos fundamentales, es un derecho contramayoritario, cuya implementación precisamente, es una obligación inderogable a cargo del Estado, incluso contra la voluntad de cualquier mayoría. Por esto sería impropio e inaceptable el sometimiento de la paz, es decir, de la solución pacífica del conflicto en cuanto negociada, a consultas populares, lamentablemente de resultado incierto. (p. 3)

En ese entendido, Juan Manuel Santos como presidente y jefe de Estado, no tenía ninguna necesidad de someter el acuerdo firmado con las FARC a un plebiscito; puesto que es su obligación garantizar los derechos, en especial los derechos fundamentales como la paz, a toda la población colombiana.

A raíz del resultado obtenido en las urnas emergen una serie movimientos sociales invocando escenarios de participación convocados por jóvenes, estudiantes, docentes, sindicalistas y otras personas de la sociedad civil en respaldo al acuerdo de paz, exigiendo su implementación. Como bien lo señala Ponte (1990): “Los movimientos sociales se nutren con innumerables energías que incluyen, en su constitución, desde formas orgánicas de acción social por el control del sistema político y cultural hasta modos de transformación y participación cotidiana de autorreproducción societaria” (p. 281).

Con base en esa premisa se iniciaron movimientos como “Paz a la calle”, que en su primera asamblea se denominó como movimiento independiente y solidario con las víctimas, que emerge de las bases de la ciudadanía y se niega al destino de un país en guerra. Así mismo, se instaló en la Plaza de Bolívar un campamento por la paz que reclamaba un “Acuerdo de Paz, ya”, justo en el mismo escenario donde se concentra

el poder del Estado: el Congreso de la República, el Palacio de Justicia, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Catedral Primada de Colombia.

Estas iniciativas se basan en un principio; la solidaridad, pues es un:

Valor que invita a la sociabilidad; es una virtud que inclina al ser humano a la cooperación, a sentirse unido a sus semejantes, promueve el bienestar de los demás y la participación en iniciativas en pro del desarrollo de la comunidad, lo que hace sentir a cualquier ser humano su utilidad e importancia en la sociedad (Ardila, 2006, p. 114).

La demostración de esa solidaridad tiene como fin reconstruir una dignidad nacional, que sea capaz de mostrarle al mundo la capacidad de solucionar el conflicto armado interno a través de una iniciativa de paz.

De igual forma, se necesita reconstruir el concepto de ciudadanía. Como diría De Sousa Santos (2001) “una nueva teoría de subjetividad que permita reconstruir el concepto de sujeto y la transformación de la práctica social llevada a cabo por el campo social de la emancipación”. Es decir, una ciudadanía que exija una reconversión global de los procesos de socialización y de inculcación cultural y de los modelos de desarrollo, que exija transformaciones concretas, inmediatas y locales; pero que también participe activamente en las decisiones que atañen al país, ejerciendo activamente los mecanismos propios de la democracia.

Pero la reconstrucción del país no solo recae en las y los ciudadanos, el Estado también debe aportar, debe ser garante de los derechos. Como señala Ardila (2006):

Colombia como Estado social de derecho debe proporcionar fielmente, entre otros, el principio del respeto por la dignidad humana. Debe recomponer la credibilidad de las instituciones y garantizar el cumplimiento y acceso a la ley y la justicia. Debe garantizar a esta nueva sociedad el mínimo de condiciones materiales necesarias para la existencia digna, elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la autorrealización individual y social. (p.115)

Con el fin de lograr esa reconstrucción y reconciliación nacional, el Gobierno y las FARC trabajaron por más de cuarenta días, creando un nuevo acuerdo que recoge las propuestas emanadas de varios sectores de la sociedad que no estaban conformes con el contenido del acuerdo firmado el 26 de octubre. Este nuevo acuerdo firmado el 24 de noviembre se espera sea el paso fundamental para dar por terminada la guerra que empezó desde hace más de cincuenta años, dado que se construyó:

Con la inclusión de las víctimas de todos los lados, con los estudiantes, los movimientos sociales y los partidos; con los miembros de las Fuerzas Armadas, con la llegada de las FARC a la vida ciudadana, con las opiniones contrarias y contradictorias de las redes, los medios de comunicación, los empresarios y trabajadores; con la participación de los abstencionistas, y la incorporación de las preocupaciones morales y religiosas de nuestro pueblo (Roux, 2016).

De esta manera, Colombia da por terminada esa cadena de fracasos iniciada aproximadamente treinta años atrás, al conseguir un acuerdo consensuado y firmado por dos actores que estuvieron en conflicto por más de medio siglo y que hoy tras la experiencia de los procesos anteriores y de años de arduo trabajo, esperan el respaldo de los sectores de oposición y de la ciudadanía en general.

¡Porque la historia lo exige, las nuevas generaciones lo reclaman y la movilización, lo aclama!

Referencias

- Ardila, F. B. (2006). *Propuestas de paz*. Bogotá.
- CCAJAR. (2006, 12 de octubre). *El genocidio contra la Unión Patriótica*. Recuperado de: <http://www.colectivodeabogados.org/EL-GENOCIDIO-CONTRA-LA-UNION>

- Colombia. (2013). *Antecedentes. Nacimiento de las guerrillas revolucionarias*. Recuperado de: <http://www.colombia.com/actualidad/especiales/dialogos-de-paz/antecedentes/>
- Guedán y Ramírez, R. D. (2005). *Colombia: la guerra de nunca acabar*. Madrid: Trama Editorial.
- PARES. Fundación Paz y Reconciliación. (2016, 6 de junio). *Procesos de paz en gobiernos anteriores*. Recuperado de <https://pares.com.co/2016/06/22/procesos-de-paz-en-gobiernos-antteriores/>
- Ponte, Víctor M.D. 1990 “Estruturas e Sujeitos na Análise da América Latina”, en *Laranjeira*, Sonia, 270.
- Roux, F. D. (2016, 23 de noviembre). *Acuerdo nacional*. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/francisco-de-roux/acuerdo-nacional-francisco-de-roux-columna-el-tiempo-53066>
- Sánchez, M. M. (2003). *Tiempos de Paz: Acuerdos en Colombia 1902-1994*. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Cultura.
- Santos, B. d. (2001). Los nuevos movimientos sociales. *Revista Osal*, 177-184.